

Asociación de Historia Contemporánea  
Actas del XIV Congreso

***DEL SIGLO XIX AL XXI. TENDENCIAS Y DEBATES***  
(Alicante, 20-22 de septiembre de 2018)

Mónica Moreno Seco (coord.)  
Rafael Fernández Sirvent y Rosa Ana Gutiérrez Lloret (eds.)



**BIBLIOTECA VIRTUAL  
MIGUEL DE CERVANTES**  
[www.cervantesvirtual.com](http://www.cervantesvirtual.com)

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  
Alicante, 2019

Asociación de Historia Contemporánea. Congreso (14.º. 2018. Alicante)

*Del siglo XIX al XXI. Tendencias y debates: XIV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Universidad de Alicante 20-22 de septiembre de 2018 / Mónica Moreno Seco (coord.) & Rafael Fernández Sirvent y Rosa Ana Gutiérrez Lloret (eds.)*

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 2019. 2019 pp.

ISBN: 978-84-17422-62-2

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019.

Este libro está sujeto a una licencia de “Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)” de Creative Commons.



© 2019, Asociación de Historia Contemporánea. Congreso

Algunos derechos reservados

ISBN: 978-84-17422-62-2

Portada: *At School*, Jean-Marc Côté, h. 1900.

# LAS POLÍTICAS DE LA MEMORIA EN AMÉRICA LATINA. LOS CASOS DE ARGENTINA Y BRASIL

Álvaro Díez Cárcamo  
(Universidad de La Rioja)

## El caso de Argentina

Argentina fue el primer país latinoamericano que llevó a cabo un proceso de transición a la democracia lo que le permitió hacer probaturas con la llamada Justicia Transicional, es decir, con políticas oficiales de verdad, justicia y reparación. La primera medida tomada por el gobierno de Raúl Alfonsín fue poner en libertad a 43 presos políticos; en febrero de 1984 aprueba una Ley por la que los Tribunales civiles tenían la potestad de absolver los cargos de aquellos tribunales militares que tuvieran cargos contra los civiles. Eso supuso que al final del mandato de Alfonsín todos los detenidos políticos habían sido puestos en libertad.

Tanto familiares, víctimas, organismos e instituciones a favor de los derechos humanos<sup>384</sup> se movilizaron a la hora de poner en marcha Comisiones de la Verdad. Fue el gobierno de Raúl Alfonsín el que aprobó la CONADEP<sup>385</sup> a los pocos días de llegar al poder. Como dijo el propio presidente: «No puede haber un manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética semejante»<sup>386</sup>. Uno de los objetivos que tenía era el de «esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas y, si es posible, determinar dónde están sus restos»<sup>387</sup>. Otro de los motivos por el que se aprueba la Ley es el de investigar tanto las desapariciones como los secuestros llevados a cabo durante la dictadura, pero con el hándicap de que se desconoce el paradero del desaparecido o no se tiene constancia de si está vivo o muerto. Si bien es Aunque se trata de una labor importante la ley deja de lado la investigación sobre las violaciones de derechos humanos que se cometieron en los años de la dictadura.

Según un informe, alguno de esos casos serían<sup>388</sup>: 1) asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas en «enfrentamientos armados» reales u orquestados; 2) desapariciones temporales, después de las cuales la persona fue puesta en libertad o su cuerpo apareció y fue identificado; 3) exilio forzoso; 4) detención y tortura (la Comisión entrevistó a los sobrevivientes e incorporó sus relatos considerando sus testimonios, pero no incluyó a estas personas en la lista de víctimas); 5) actos de violencia cometidos por la oposición armada y 6) desapariciones realizadas por fuerzas gubernamentales antes del establecimiento del régimen militar de 1976.

---

<sup>384</sup> Es preciso distinguir entre aquellas organizaciones que vencieron la incredulidad inicial respecto al trabajo de la CONADEP y aquellas que mantuvieron su desacuerdo con ésta. Entre los últimos, encontramos a las organizaciones Madres de Plaza de Mayo y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

<sup>385</sup> Decreto Presidencial Número 187290 del 15-12-1983.

<sup>386</sup> CUYA, Esteban: «Las Comisiones de la Verdad en América Latina», en: [www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html](http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html).

<sup>387</sup> GONZÁLEZ MORALES, Javiera e IBARRA PARDES, Natalia: *Comisiones de verdad. Casos chileno y argentino*, Chile, Universidad de Chile, 2015, pp. 231-232.

<sup>388</sup> HAYNER, Priscilla: *Verdades Innombrables: El reto de las Comisiones de Verdad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2008.



Dicha comisión, como recoge el decreto número 187, dice que «la comisión no podrá emitir juicio sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial»<sup>389</sup>. Como consecuencia de lo expuesto en dicho decreto, los miembros de la comisión no tienen obligación alguna de dar ni ofrecer los nombres de los represores o los culpables de violaciones de derechos humanos. Su labor se centraría únicamente entonces, en buscar explicaciones para los desaparecidos, en el sentido de saber lo que pasó y cómo sucedió.

Para poder elaborar un informe respecto a esos principios, se tienen en cuenta una serie de procedimientos<sup>390</sup>: 1. Reconocimiento in situ de centros clandestinos de detención con la concurrencia de liberados de dichos campos. 2. Visita a las morgues para recabar información sobre ingresos irregulares. 3. Diligencias en vecindarios y en lugares de trabajo para determinar la ubicación de los centros clandestinos de detención y las modalidades que se utilizaban para secuestrar a las personas. 4. Recepción de declaraciones testimoniales de personal en actividad o en retiro de las fuerzas armadas y de seguridad. 5. Revisión de registros carcelarios. 6. Revisión de registros policiales. 7. Investigación de delitos cometidos sobre los bienes de los desaparecidos. Pero hay más, estas propuestas o recomendaciones tienen otro objetivo: «estas recomendaciones tienden a que no se pierda de vista la necesidad de una profunda investigación judicial de los hechos que nos fueron denunciados»<sup>391</sup>.

Algunas de las proposiciones que recoge el informe son las siguientes: a) Que el organismo que sustituya a esta Comisión acelere los trámites tendientes a remitir a la justicia la documentación recogida durante la investigación encomendada por el Poder Ejecutivo. b) Que el Poder Judicial se aboque adecuadamente a la agilización de los trámites investigativos y de comprobación de las denuncias recibidas por esta Comisión. c) Que se dicten las normas necesarias para que los hijos y/o familiares de personas desaparecidas durante la represión reciban asistencia económica; becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo. Asimismo, que se sancionen las medidas que se estimen convenientes y que concurren a paliar los diversos problemas familiares y sociales emergentes de la desaparición forzada de personas. d) Sancionar normas que tiendan a: 1. Declarar crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas 2. Apoyar el reconocimiento y la adhesión a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos 3. Establecer la enseñanza obligatoria de la defensa y difusión de los Derechos Humanos en los organismos docentes del Estado, sean ellos civiles, militares o de seguridad. 4. Fortalecimiento y adecuación plena de los medios con que deberá contar la justicia civil para la investigación de oficio en relación a la violación de Derechos Humanos 5. Derogar toda la legislación represiva que se encuentre vigente.

Con la aprobación del Decreto Ley 158/1983 de 10 de diciembre<sup>392</sup>, el gobierno argentino anula la anterior Ley de Pacificación Nacional de abril de 1983, una especie de autoamnistía militar y pretendió que se procesaran a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y a los jefes de las Juntas Militares por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA). Se daba la excepción de que aquellos que habían tenido la obligatoriedad de obedecer las órdenes pero no hubieran sido actores principales de los hechos quedarían excluidos de esta ley y no estarían sujetos a acusación alguna, juzgando solamente a los responsables de la represión. Para ello, el Gobierno pidió la colaboración de los militares, solicitando que, en un papel, anotasen los nombres de los altos

---

<sup>389</sup> <http://www.derechos.org/ddhh/arg/ley/conadep.txt>.

<sup>390</sup> Informe CONADEP, Capítulo 4, VII.

<sup>391</sup> Informe CONADEP, Capítulo VI, Recomendaciones.

<sup>392</sup> <http://www.historiaydoctrinadelaucr.com/2014/08/raul-alfonsin-decreto-15783-y-15883-13.html>.

cargos u oficiales, con el objetivo de que no pagaran justos por pecadores y conseguir limitar las acusaciones a los únicos y verdaderos responsables. Al final, sí que hubo lista, pero contenía solamente 9 nombres<sup>393</sup>. Esta Ley de Punto final resultó ser «un error»<sup>394</sup>, ya que con ella no se alcanzó uno de los objetivos que perseguía, que no era otro que «calmar a los militares»<sup>395</sup>.

El informe definitivo que aparece en 1984 dice que hay constatadas unas 8.963 desapariciones y que llegaron a existir unos 340 centros clandestinos, aportando datos hasta de un total de 1.351 personas que habían colaborado de un modo u otro en los procesos de represión, habiendo entre ellos desde médicos, periodistas, sacerdotes...<sup>396</sup>. Según los organismos de Derechos Humanos, se presentaron unos 6000 casos sobre desapariciones y asesinatos llevados a cabo durante la dictadura y alrededor de 3600 nuevas denuncias<sup>397</sup>. Entre los desaparecidos o los que fueron hechos prisiones, se podían encontrar diversas capas sociales<sup>398</sup>: burguesía empresaria: 3,2%; capas medias acomodadas: 13%; pequeña burguesía independiente, 16,6%; asalariados urbanos calificados con condiciones de vida de sectores medios, 32,5%; y asalariados urbanos y rurales con condiciones de vida obrera, 34,7%.

Para Argentina, el llamado «Juicio del Siglo» era como el último acto de justicia después de las atrocidades cometidas durante la dictadura. Pero no fue así. Las diversas organizaciones de derechos humanos iban a mantenerse firmes en su búsqueda de justicia en los tribunales civiles. Un ejemplo de ello se dio con la sentencia del Tribunal Federal Argentino (TFA), que en su punto 30 contra la Junta Militar contra actos atroces y abominables, excluye de investigar casos sobre el cierre de delitos abiertos conforme había quedado dispuesto en el Decreto 158 que decía que se limitaban las responsabilidades a quienes habían estado al mando del aparato represivo.

En 1987 se había firmado la Ley de Obediencia Debida, que decía que aquellos militares cuyo rango se situara por debajo de Coronel no serían juzgados, pues se entendía que sus acciones se debían más a la lealtad y cumplimiento de las órdenes de sus superiores que a violaciones sistemáticas a conciencia de los derechos humanos. Quienes quedaron fuera de la cobertura de esta Ley eran los que habían llevado a cabo planificaciones para secuestrar o ayudar a secuestrar a hijos de personas desaparecidas. A partir de ese momento, la búsqueda y recuperación de esos hijos se convirtió en uno de los objetivos y propuestas de las Abuelas de la Playa de Mayo<sup>399</sup>. Casi una década después de haberse firmado esa Ley de Obediencia, el número de hijos encontrados llegaba a 61.

Para las Abuelas de la Plaza de Mayo, cualquier tipo de compensación económica eran «actos de prostitución»<sup>400</sup> y su objetivo era el de juzgar a los responsables. No hay que olvidar que este grupo se integra dentro de las Madres de la Plaza de Mayo, que son las fundadoras, pero mantienen

---

<sup>393</sup> ACUÑA, Carlos: «Justicia Transicional en Argentina y Chile: ¿la Historia del nunca acabar?», en *Seminario Mellón sobre justicias en las Transiciones*, Universidad de Columbia, diciembre, 1998.

<sup>394</sup> Conferencia de prensa convocada por el ex presidente Alfonsín el 4 de febrero de 1998, luego de la frustrada sesión parlamentaria donde se intentó derogar las leyes de «Punto Final» y de «Obediencia debida».

<sup>395</sup> «Alfonsín acusó a Menem de institucionalizar el olvido», en: [www.clarin.com](http://www.clarin.com), 05-02-1998.

<sup>396</sup> Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de Argentina se amplía esa cifra: 3000 nuevos casos, elevando el número a 12.000, aunque otras instituciones como Amnistía Internacional la superan, cifrándola en 30.000.

<sup>397</sup> IZAGUIRRE, Inés: «La política de la memoria y la memoria de la política en Argentina», *Razón y revolución*, 4 (otoño 1998), p. 3.

<sup>398</sup> IZAGUIRRE, Inés: «La política de la memoria...», p. 46.

<sup>399</sup> <https://www.abuelas.org.ar/abuelas/historia-9>.

<sup>400</sup> SURIANO, Juan: *Dictadura y Democracia (1976-2001): Nueva Historia Argentina*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, Volumen 10 de Nueva historia argentina, 1998.

posiciones dispares, como en este caso<sup>401</sup>. El papel que llevaron a cabo las Abuelas de la Plaza de Mayo se transformó en la creación, por parte gubernamental, de una Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad<sup>402</sup>. Pero no se trató de una Comisión independiente, sino que trabajaba de manera conjunta e interdisciplinar con el Banco Nacional de Datos Genéticos<sup>403</sup>, que llevaba trabajando desde 1987 gracias a la firma de la Ley 23511<sup>404</sup>. Un acierto por parte del Gobierno fue el de aplicar el «derecho a saber»<sup>405</sup> dónde estaban o podían localizarse los desaparecidos. Con motivo de ese derecho, Argentina crea en 1996 una Comisión de la Verdad dedicada a este fin.

Fue terminando el año 1989 cuando Carlos Menem accede a la presidencia de Argentina. Su mandato dura 2 legislaturas, por lo que permaneció en el poder hasta finales de 1999. Tras haber sido prisionero durante la dictadura y teniendo su experiencia y las vivencias presentes, el nuevo gobierno democrático se dedicó a legislar sobre un tema importante en lo relacionado a la Justicia Transicional: la reparación económica de las víctimas, sobre todo para aquellas que habían sufrido violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1974-1983). Hay que tener presente que, si bien se pretendieron llevar a cabo medidas de este tipo, la justicia no iba a ser protagonista de ellas, pues desde la época de gobierno de Raúl Alfonsín se firmaron tanto las normas de «punto final» (1986)<sup>406</sup>, como la de Obediencia debida (1987)<sup>407</sup>, y que supusieron que tanto los militares como las fuerzas de seguridad dejarían de ser perseguidos y juzgados por sus acciones criminales durante la dictadura.

Es más, el propio presidente Menem indultó a algunos componentes de las Juntas Militares que ya habían sido condenados en el llamado «Juicios a las Juntas»<sup>408</sup>, del mismo modo que libró de cualquier responsabilidad jurídica a militares de alto rango que aún tenían cuentas pendientes con la justicia. Como consecuencia de esta decisión, las víctimas de la dictadura decidieron llevar sus quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que se conocieran las acciones cometidas respecto a la violación de los derechos humanos y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Una vez que dicha comisión tuvo noticia de estas quejas presentó un informe que decía:

1. Que las leyes Numero 23.492 y 23.521 y el Decreto n.º 1002/89 son incompatibles con el artículo XVIII (derecho de Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Recomendamos que el Gobierno de Argentina otorgue a los peticionarios una justa compensación por las violaciones a las que se refiere el párrafo precedente. 3. Recomendamos al Gobierno de Argentina la adopción de medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los

---

<sup>401</sup> GUEMBE, María José: «La Experiencia Argentina de Reparación Económica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos», p. 5 ([http://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/82714/mod\\_resource/content/0/Guembe.pdf](http://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/82714/mod_resource/content/0/Guembe.pdf)).

<sup>402</sup> <https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/conadi>.

<sup>403</sup> <http://www.bndg.gob.ar/historia.php>.

<sup>404</sup> Ley 23511: Banco Nacional de Datos Genéticos. Creación a fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación. Boletín Oficial: 10-07-1987.

<sup>405</sup> CORREA, Cristián: «Programas de reparación para violaciones masivas de derechos humanos: lecciones de las experiencias de Argentina, Chile y Perú», *Revista Amnistía Política y Justicia de Transición*, Ministerio de Justicia de Brasil, 3 (enero/junio 2010).

<sup>406</sup> Ley 23492, publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 1986.

<sup>407</sup> Ley 23521, publicada en el Boletín Oficial el 9 de junio de 1987.

<sup>408</sup> Decreto N.º 158/83: Orden presidencial de procesar a las juntas militares, por el que el entonces Presidente Raúl Alfonsín ordenaba someter a juicio sumario a nueve militares de las tres armas que integraron las Juntas que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas en 1982.

responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar. 4. Dispone la publicación del presente informe<sup>409</sup>.

Una de las primeras iniciativas<sup>410</sup> del nuevo mandatario fue la de perdonar a unos 220 responsables militares sus crímenes y atrocidades pasadas, y como contrapeso se verían sometidos a recortes de tipo económico o a ser sancionados en el caso de que volvieran a cometer algún tipo de delito. Pocos años después, en este caso, en 1991, aprobó la concesión de otros indultos<sup>411</sup>, lo que significaba que la democracia Argentina liberaba a aquellos militares, altos cargos, que cometieron violaciones contra los derechos humanos durante la dictadura.

Ante la consternación social y la presión ejercida por el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, se aprobaron varios decretos cuyo objetivo era el de recompensar de manera económica tanto a quienes hubieran sufrido detenciones ilegales durante la dictadura como a los padres o los hijos de personas desaparecidas. El primero de ellos fue en 1991<sup>412</sup> y consistía en compensar a quienes fueron hechos presos por el poder Ejecutivo<sup>413</sup>. Años más tarde, en 1994 se aprueba otra Ley que mejora y amplía la cobertura de aquellas personas que hubieran sido detenidas o enjuiciadas tanto por tribunales militares como por el poder Ejecutivo. En esta ocasión, se les compensaba económicamente a aquellas personas que, comenzado el juicio, hubieran sido reparadas con una cantidad menor a lo que disponía el decreto Número 70/91 y la ley 24.043<sup>414</sup>.

Una fecha clave en el proceso de investigación sobre lo ocurrido durante la dictadura fue marzo de 1998, cuando la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ) se pusieron de acuerdo para derogar las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida<sup>415</sup>, aunque este proceso no había estado carente de enfrentamientos<sup>416</sup>. Otro gran avance fue que el Tribunal de Apelaciones

---

<sup>409</sup> CIDH, Informe Número 28/92, casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311 Argentina, dictado el 2 de octubre de 1992. Publicado en el Informe Anual de la CIDH 1992-1993; OEA/Ser.L/V/II.83; Doc. 14, 12-03-1993.

<sup>410</sup> Decreto 1002/89: Indulta a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, excepto el ex-general Carlos Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos; Decreto 1003/89: Indulta a líderes y miembros de los grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión, entre ellas personas que se encontraban muertas o «desaparecidas». También indulta a militares uruguayos; Decreto 1004/89: Indulta a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988. Decreto 1005/89: Indulta a los ex-miembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.

<sup>411</sup> Decreto 2741/90: Indulta a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Indulta también a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad Ramón Camps y Ovidio Riccheri; Decreto 2742/90: Indulta a Mario Eduardo Firmenich, líder de la organización guerrillera Montoneros; Decreto 2743/90: Indulta a Norma Kennedy, procesada por malversación de fondos públicos; Decreto 2744/90: Indulta a Duilio Brunello, condenado a inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de fondos públicos; Decreto 2745/90: Indulta al ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein; Decreto 2746/90: Indulta al ex militar Guillermo Suárez Mason por delitos de lesa humanidad.

<sup>412</sup> Decreto núm. 70/91, por el que se establecen beneficios para aquellas personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por acto emanado de éste, antes del 10 de diciembre de 1983 y que, habiendo iniciado juicio por indemnización de daños y perjuicios por tal motivo antes del 10 de diciembre de 1985, no hubieran obtenido satisfacción por haberse hecho lugar a la prescripción mediante sentencia firme.

<sup>413</sup> SURIANO, Juan: *Dictadura y Democracia...*

<sup>414</sup> Decreto 1313/94 del 1 de agosto de 1994.

<sup>415</sup> «Promulgaron la derogación de la Ley de Obediencia debida», en: [www.lanacion.com](http://www.lanacion.com), 18-04-1998.

<sup>416</sup> «El debate sobre la Ley de Punto Final divide a la oposición argentina», en: [www.elpais.com](http://www.elpais.com), 31/01/1998.

de la capital argentina evitase, mediante Ley, que se destruyeran aquellos archivos militares que aún estuvieran en posesión del Consejo de las Fuerzas Armadas (CFA) y que permitieran la identidad de los desaparecidos y la posterior acusación a sus responsables<sup>417</sup>.

Pasaron unos años hasta que se aprueba la Ley 24.411<sup>418</sup> que destacó por el debate en torno a la idea que se tenía o se debía de tener acerca de lo que es reparar económicamente a las víctimas de una dictadura. Sin embargo, surgió un problema imprevisto y es que ni las víctimas, ni sus familiares ni sus sucesores pudieron cobrar la compensación económica, a menos que tomaran la decisión de declarar que la víctima había muerto. Es decir, aceptar un dinero sin tener la seguridad ni la certeza de dónde podía estar su familiar y si aún vivía. Por ello, el gobierno decidió aprobar la Ley de Ausencia por Desaparición Forzada<sup>419</sup>, lo que significa que los familiares no tienen que verse en la obligación de declarar muerto a su ser querido, sino que es el Estado el que entiende que esa persona no está presente y no se sabe de ella por el hecho de que ha sido secuestrada de manera ilegal y aún no ha aparecido, ni viva ni muerta.

Respecto a los presos políticos, el gobierno aprueba la Ley 24.043<sup>420</sup>, por la que aquellas personas que hubieran estado presas ya fuera por el Ejército o por el poder Ejecutivo antes del 10 de diciembre de 1983<sup>421</sup> y pudieran acreditar el lugar, se verían beneficiadas atendiendo al estado de sitio. Pero no fueron los únicos, pues aquellas personas, civiles en este caso, que hubieran sido detenidas, con sentencia o sin ella, por parte de los Tribunales Militares, también se verían amparadas por la Ley, independientemente o no de si ellos, por cuenta propia, ya hubieran decidido denunciar.

A este respecto, el decreto 70/91, en su artículo 7<sup>422</sup>, dice: «Los derechos otorgados por este decreto podrán ser ejercidos por las personas mencionadas en el artículo 1 o, en caso de fallecimiento, por sus derechohabientes». El artículo 11 menciona que: «el pago del beneficio importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios en razón de la privación de la libertad, arresto puesta a disposición del Poder Ejecutivo, muerte o lesiones, y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto».

---

<sup>417</sup> SOLÍS DELGADILLO, Juan Mario: *Los tiempos de la memoria en las agendas políticas de Argentina y Chile*, Buenos Aires, Eudeba, 2016.

<sup>418</sup> Ley 24.411: que otorgó una reparación económica a las víctimas de desaparición forzada y a los sucesores de personas asesinadas por los militares, miembros de las fuerzas de seguridad o grupos paramilitares Sancionada el 7 de diciembre de 1994. Decreto reglamentario 403/95 sancionado el 29-08-1995.

<sup>419</sup> Ley 24.321, sancionada el 11-05-1994.

<sup>420</sup> Ley 24.043: Ley de Indemnización a ex-presos políticos. Sancionada el 27-11-1991, publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 1992 con la observación efectuada en el decreto N.º 2722/91. Reglamentada por decreto N.º 1023/92 modificado por decreto N.º 205/97. Ampliada por decreto N.º 1313/94.

<sup>421</sup> Este término fue establecido en el decreto reglamentario Número 1023/92 y no figura en la ley.

<sup>422</sup> Decreto núm. 70/91, por el que se establecen beneficios para aquellas personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por acto emanado de éste, antes del 10 de diciembre de 1983 y que, habiendo iniciado juicio por indemnización de daños y perjuicios por tal motivo antes del 10 de diciembre de 1985, no hubieran obtenido satisfacción por haberse hecho lugar a la prescripción mediante sentencia firme.



Al poco de terminar la dictadura se firman las leyes Ley 23.053<sup>423</sup> y la Ley 23.117<sup>424</sup>. En 1985 se firma la Ley 23.238<sup>425</sup>. Pasaron algunos años hasta que se aprobaron algunas medidas semejantes, como la Ley 23.278<sup>426</sup> y posteriormente la Ley 23.523<sup>427</sup>. Después de tantos años de dictadura y con la llegada de un gobierno que planteaba la posibilidad de hacer justicia, la primera medida que adoptó estaba relacionada tanto con las víctimas como con sus familiares y tenía que ver con la aprobación de una pensión para cónyuges e hijos de personas desaparecidas<sup>428</sup>. Poco a poco el gobierno fue delegando esa función de ayuda en aquellas instituciones o grupos vinculados con las desapariciones, hasta que la crisis económica hizo estragos y no se pudo continuar con este tipo de aportaciones monetarias. Sin embargo, tanto los familiares como las víctimas entendían que el Estado, como garante de los derechos humanos, no podía dejarles sin esa prestación, que era una obligación para con aquellas personas que se habían visto privadas de sus derechos básicos o habían sufrido la desaparición de algún familiar.

## El caso de Brasil

Brasil se caracteriza en este tema por la presencia de un actor principal y determinante, quizá sorprendente por lo que acontece en otros países, pero fundamental en el caso del país latinoamericano. Fue la Iglesia brasileña la que, de manera secreta y aprovechando lo que le estaba ocurriendo a Argentina con el desmoronamiento militar, quién se dedicó a obtener documentos confidenciales relacionados con el procesamiento de 707 subversivos denominados así por el Tribunal Militar Supremo. Este proceso duró casi 3 lustros, desde 1970 hasta 1985, periodo en el que se mandaron buena parte de estos documentos fuera del país, para evitar que fuesen intervenidos y destruidos y proceder a su estudio e investigación. La consecuencia primera fue la de intentar construir, a partir de la información recuperada, un libro o un informe sobre la represión en Brasil<sup>429</sup>.

El caso es que este trabajo no pretendía más que azotar la conciencia nacional, hacerla despertar del letargo en el que se encontraba, tener que reconocer el pasado violento que había sufrido el país, resultado de las denuncias presentadas. Era necesario poder conocer la verdad para dejar atrás

---

<sup>423</sup> Ley 20.053: Reingreso al cuadro permanente activo del servicio exterior de la nación, de los funcionarios declarados prescindibles. Sancionada el 22-02-1984.

<sup>424</sup> Ley 23.117: que estableció la reincorporación de los trabajadores de las empresas del Estado que hubieran sido cesanteados por causas políticas y gremiales durante dicho período. Sancionada el 30-03-1984.

<sup>425</sup> Ley 23.238: que dispuso la reincorporación y el reconocimiento del tiempo de inactividad a los efectos laborales y previsionales de los docentes que habían sido declarados prescindibles o cesantes por causas políticas, gremiales o conexas hasta el 9 de diciembre de 1983. Sancionada el 10-09-1985.

<sup>426</sup> Ley 23.278: se dirigió a aquellas personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados, o se vieron obligadas a exiliarse. Sancionada el 28-09-1985.

<sup>427</sup> Ley 23.523: que dictaminó la reincorporación de los trabajadores bancarios despedidos por razones políticas. Sancionada el 24-06-1988.

<sup>428</sup> Ley 23.466 de 1986: Otorgase una pensión no contributiva a familiares de personas desaparecidas, sancionada el 30-10-1986. Reglamentada por decreto N.º 1228/87.

<sup>429</sup> WESCHLER, Laurance: *A miracle a universo. Settling accounts with past tortures*, Nueva York, Pantheon Books, 1990.

el pasado y mirar hacia la liberación social<sup>430</sup>. Con todo, y sin la intención de convertirse en un informe con carácter reivindicativo, sirvió para visibilizar y poder juzgar a los responsables de las atrocidades de la dictadura promoviendo la verdad sobre desapariciones, torturas, asesinatos..., cometidos entre 1964-1979.

El informe final hacía un repaso sobre los presos políticos que habían sido sometidos a tortura en el país, de manera sistemática y daba datos acerca del número de desaparecidos, cifrándolos en 339 de los cuales casi la mitad, unos 144, se consideraban desaparecidos<sup>431</sup>. Gracias a los datos aportados por dicho informe y al impacto que tuvo en la sociedad, ya que llegó a convertirse en líder de ventas, Brasil firmó la Convención contra la Tortura<sup>432</sup>.

El tema del pasado no fue algo que se trató desde un principio en la política brasileña y no se presentó en el centro del debate hasta 1998, cuando la llegada al Gobierno de Henrique Cardoso permitió que se incluyese en el programa gubernamental. Si se compara con lo sucedido en Argentina, surge la pregunta de por qué se tardó tanto tiempo en debatir sobre ese tema o en ponerlo en el epicentro del debate social. Pero varias pudieron ser las causas: según los datos reflejados en el informe, no fueron tantas las personas desaparecidas y además era una situación social a la que los brasileños ya estaban acostumbrados, formaba parte de su identidad social. Además, los desaparecidos eran miembros de las guerrillas o de grupos aislados, es decir, su repercusión era ínfima en relación con lo que podían ser miembros de la sociedad civil o de la política.

Por otro lado, Brasil es un país inmenso y la mayor parte de las desapariciones se habían concentrado en dos zonas concretas: Sao Paulo y Araguaia<sup>433</sup> y el paso del tiempo, 15 años antes de la llegada de la democracia, había jugado a favor del olvido. Además, la muerte de unos guerrilleros en una zona de la selva, no despertaba interés en la sociedad, por el mero hecho de que se consideraba algo común, un tipo de violencia estructurada y conocida y que, además gozaba de cierta impunidad social. Con todo, y así lo reflejan los datos, se pueden contabilizar unos 1.188 asesinatos de los cuales un porcentaje muy pequeño ha quedado sin ser castigado<sup>434</sup>.

En Brasil también se firmó una Ley de Amnistía<sup>435</sup>, en 1979, que permitió ese proceso de tránsito de una dictadura a una democracia y en su artículo primero se dice que: «Se concede amnistía a todos los que, en el período comprendido entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979, cometieron crímenes políticos o conexos con éstos, crímenes electorales, a los que tuvieron sus derechos políticos suspendidos ya los servidores de la Administración Directa e Indirecta, de fundaciones vinculadas al poder público, a los Servidores de los Poderes Legislativo y Judicial, a los Militares ya los dirigentes y representantes sindicales, castigados con fundamento en Actos Institucionales y Complementarios».

---

<sup>430</sup> NÚCLEO DE ESTUDIOS DE LA VIOLENCIA: *En busca dos desaparecidos: a fosa común do cimento Dom Bosco*, Universidad de Sao Paulo, 1991, p. 74.

<sup>431</sup> ARCHIDIÓCESIS DE SAO PAULO: *Brasil Nunca Mais. Un relato para la Historia*. Tomo V, Volumen I-III, Petrópolis, Vozes, 1985, pp. 894 y ss.

<sup>432</sup> <http://www.acnur.org/nuevaspaginas/tablas/tabla1.htm>.

<sup>433</sup> BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: *La Justicia Transicional en Brasil El caso de la Guerrilla de Araguaia*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2017.

<sup>434</sup> BARAHONA de BRITO, Alexandra y PANIZZA Francisco: «Derechos Humanos en el Brasil democrático», *Democratización*, 5/4 (1998), pp. 20-51.

<sup>435</sup> Ley 6.683/79 de 22 de agosto de 1979.

Al igual que ha sucedido con la aprobación de otro tipo de amnistías en diferentes partes del mundo, los promotores de la Ley fueron tanto movimientos opositores a la dictadura como víctimas de ella, que pretendían, con su aprobación, una amnistía para los presos políticos que permitiera asentar las bases para establecer una democracia<sup>436</sup>.

Pero como suele suceder con los proyectos de Amnistía, su lenguaje y sus propuestas ni satisfacen a todos y quedan un poco escasas, ambiguas incluso en su redacción y en sus propósitos, pues no sólo se hablaba de liberar a los presos políticos, sino también a aquellas personas que tuvieran relación con los políticos. Se podía, por lo tanto, entender, que el gobierno brasileño pretendía ofrecer la inmunidad a aquellos funcionarios que durante los años de la dictadura hubieran llevado a cabo o cometido acciones represoras contra opositores al régimen<sup>437</sup>, siendo ejemplo las violaciones de los derechos humanos, las desapariciones forzadas, los asesinatos...

En cierto modo, la amnistía fue para los brasileños como una liberación, librarse de las cadenas de la dictadura, que quedaba manifestada como «la idea reivindicada en las calles, como amnistía amplia, general e irrestricta a los presos políticos y comprendida históricamente como una bandera capaz de organizar la resistencia democrática, galvanizar el imaginario democrático y ganar un sentimiento de oposición al régimen»<sup>438</sup>.

La Ley de Amnistía significó dejar en libertad a los presos políticos<sup>439</sup> y la posibilidad de que volvieran los exiliados<sup>440</sup>. Como es normal, el grupo de los militares se posicionó en contra de la aprobación de la citada Ley, aunque finalmente no les quedó más remedio que aceptarla como consecuencia de la presión ejercida por los movimientos pro amnistía que se llevaban manifestando desde inicios de 1978 en favor de tal acción. Sin embargo, la Ley de Amnistía (Ley 6683) no pudo entenderse como un logro o una concesión del Gobierno, sino como el final, la coronación de una larga lucha, la posibilidad de volver a conquistar libertades perdidas, democráticas, que le fueron privadas al pueblo brasileño mediante el uso de la fuerza.

El caso brasileño también es especial en lo relativo a las peticiones de perdón por parte de los represores. No se hicieron de manera pública, sino que estas acciones correspondieron a los Consejeros de la Comisión de Amnistía, y fueron hechas de manera individual y particular. Para los brasileños, cuando se habla de que una persona es un «amnistiado político», en referencia a lo sucedido durante la dictadura y la aprobación de la Ley de Amnistía, va inherente a la descripción la idea del perdón. Es más, «el derecho a la reparación se transformó en Brasil en un verdadero

---

<sup>436</sup> Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos: *Derecho a la memoria y a la verdad*, secretaria especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, 2007, p. 28.

<sup>437</sup> PIOVESAN, Flavia: «Derecho internacional dos direitos humanos e ley de amnistía: el caso brasileño», en *Revista Anistia. Política e justiça de transição*, 2 (Julio-diciembre 2009), p. 181.

<sup>438</sup> ABRÃO, Paulo; CARLET, Flavia; FRANTZ, Daniela; MODEL, Kelen y FERNANDES, Vanda: «As Caravanas da Anistia: um mecanismo privilegiado da justiça de transição brasileira», *Revista Anistia. Política e justiça de transição*, 2 (Julio-diciembre 2009), pp. 116-117.

<sup>439</sup> Artículo I: «Es concedida la amnistía a todos cuantos, en el período comprendido entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979, cometieron crímenes políticos o conexos con éstos, crímenes electorales, a los que tuvieron sus derechos políticos suspendidos ya los servidores de la Administración Directa e Indirecta, de fundaciones vinculadas al poder público, a los Servidores de los Poderes Legislativo y Judicial, a los Militares ya los dirigentes y representantes sindicales, castigados con fundamento en Actos Institucionales y Complementarios y otros diplomas legales».

<sup>440</sup> MIRANDA, Nil Mário y TIBURCIO, Carlos: *Dos filhos deste solo: mortos e desaparecidos durante a ditadura militar: a responsabilidade do Estado*, Sao Paulo, Fundación Perseu Abramo-Boitempo Editorial, 1999, p. 13.

‘derecho a la amnistía’, más específicamente, a un derecho del perseguido político de ser declarado oficialmente amnistiado político, reconociendo la legitimidad de su resistencia»<sup>441</sup>.

La idea del amnistiado político no sólo surge en la Ley de Amnistía, sino que ya queda reflejado en la Constitución de 1988<sup>442</sup>, en las disposiciones transitorias, artículos 8 y 9, incluso también queda ya recogida la visión de los perseguidos, es decir de aquellas personas que se vieron privadas de libertad o violados sus derechos humanos mínimos únicamente por cuestiones políticas. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que los denominados amnistiados políticos regularizaran su situación, que se llevó a cabo con la aprobación de la Ley 10.559/2002<sup>443</sup>.

Quienes más lucharon para que la amnistía resultara efectiva fueron los Comités Brasileños por la Amnistía (CBA)<sup>444</sup>, grupo que exigía que dicha propuesta llevara en su programa una liberación de presos de amplio alcance, general e ilimitada. Además, los presos apoyaban estas iniciativas con huelgas de hambres quejándose por las condiciones en las que se encontraban. Para presentar esas propuestas contaron con los apoyos importantes de la Organización de Abogados de Brasil (OAB), la prensa, la jerarquía eclesiástica, de gran relevancia en el país y otros grupos de presión, tanto sociales como políticos<sup>445</sup>. A pesar de contar con tantas instituciones a su favor y poder ejercer una presión al gobierno, la Ley no colmó de todo sus expectativas, puesto que no todos los presos fueron puestos en libertad e incluso las fuerzas de seguridad pudieron beneficiarse de la citada Ley. El mensaje parecía claro: aquellos políticos que durante la dictadura se hubieran visto privados de su libertad y de la posibilidad de ejercer como tales, volvían a tener la posibilidad de dedicarse a su actividad política pero a cambio no debían decir nada respecto a la impunidad militar.

La Transición no fue sencilla, pues se realizó bajo la mirada del ejército y los grupos más conservadores, lo cual dificultó su desarrollo, lo ralentizó y obstaculizó la apertura. La lentitud en los procesos, con la excusa de que era necesaria una cierta seguridad fue el argumento utilizado para retrasar en mayor medida esta transición<sup>446</sup>. El objetivo era que el paso de un régimen a otro se hiciera con cierta celeridad, pues de este modo no daba tiempo a desdecirse de lo hecho, pero no se pudo ejecutar de esa manera. A pesar de que se fue desmantelando de manera progresiva los casos de represión, los grupos paramilitares aún seguían ejerciendo presión al gobierno y a la sociedad civil y la clase política con el objetivo de «accionar esporádicamente maniobras tendientes a aparentar algunos cuidados al respeto de los derechos humanos»<sup>447</sup>.

La firma de la Constitución Federal de 1988 supuso la ampliación de una serie de garantías y derechos para la sociedad brasileña, y la posibilidad de dejar atrás un pasado marcado por las muertes, las torturas y las desapariciones. Gracias al impulso que cogieron las asociaciones no gubernamentales, la defensa de ciertos valores democráticos y de los derechos humanos se hizo más visible y palpable. Ante la inactividad política para juzgar a los responsables de las desapariciones, muchas asociaciones, la propia Iglesia y, sobre todo, los familiares de las víctimas,

---

<sup>441</sup> GARRETÓN KREFT, Francisca; GONZÁLEZ LE SAUX, Marianne; LAUZÁN, Silvana: *Políticas públicas de Verdad y Memoria en 7 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay)*, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2011, p. 48.

<sup>442</sup> <http://pdpa.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html>.

<sup>443</sup> «Brasil: Amenazada la Comisión de Amnistía», en: <https://operamundi.uol.com.br/>, 03-09-2017.

<sup>444</sup> <http://www.fgv.br/cpd/doc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/comite-brasileiro-pela-anistia-cba>.

<sup>445</sup> PINHEIRO, Sergio Paulo: «Transición política y Estado de Derecho en la República», en *Brasil, un siglo de transformaciones*, Sao Paulo, Compañía de las Letras, 2001, p. 290.

<sup>446</sup> PINHEIRO, Sergio Paulo: «Transición política...», p. 23.

<sup>447</sup> Archidiócesis de Sao Paulo: *Brasil Nunca Mais...*, p. 65.



decidieron responsabilizar de ello al gobierno. Incluso hubo presiones para que desde el Instituto Forense no se llevaran a cabo estudios exhaustivos de los cadáveres que llegaban o, por lo menos, no llegar a la conclusión de que hubieran sufrido tortura alguna, desactivando su labor profesional<sup>448</sup>, ante la regla no escrita, de no juzgar a los militares, quienes seguían viviendo con cierto acomodo, puesto que muchos se habían jubilado o aún ejercían su labor en el seno del Ejército.

A partir de la Ley 9140 se pudo reparar económica y moralmente a las personas muertas durante la primera parte de la dictadura militar. No sólo eso, sino que gracias a este tipo de acciones, se constituyó una comisión investigadora para reconocer a las personas que hubieran fallecido o sufrido tortura en las dependencias policiales, ubicar personas desaparecidas y facilitar la reparación económica. De un total de 234 casos de se les concedió la reparación moral a 148, mientras que a los 86 restantes se les fue denegada<sup>449</sup>. Para algunos, esta Ley y sus consecuencias supuso un reconocimiento por parte del Estado de los crímenes cometidos durante la dictadura.

A comienzos de 1990 se descubre una fosa con los restos de 1049 cadáveres de la dictadura. Siendo ya un tema complicado de ocultar, se toma la decisión de crear una comisión que se encargue del estudio de lo sucedido, tanto encontrar la verdad como identificar los cuerpos. Se decide crear una Comisión para la Búsqueda de los Desaparecidos Políticos<sup>450</sup>. Una vez que se descubre este caso, tanto el Estado de Río de Janeiro como el de Pernambuco deciden comenzar a investigar y recorrer varios cementerios, acompañados por grupos de forenses, médicos, especialistas en medicina legal, antropólogos..., con el fin de determinar la posible existencia de más casos como el anterior<sup>451</sup>.

Con la llegada al poder de Fernando Collor de Mello se produce un cierto alivio para familiares y víctimas, pues una de las primeras medidas<sup>452</sup> que se aprueban es la apertura de los archivos policiales de la época de la dictadura. Esta decisión fue bien acogida por una parte de la sociedad, más aún si se tiene en cuenta que en Europa estaba sucediendo algo parecido tras la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS, abriéndose muchos archivos policiales en los nuevos países del Este. Cada vez que familiares o víctimas descubrían o daban con la localización de uno de estos militares, lo que hacían era elaborar un informe con sus datos, sus acciones y atrocidades cometidas y enviarlo tanto a la prensa como a las autoridades pertinentes, ya fueran estatales, municipales o federales con el fin de que fuera detenido o evitando que pudieran seguir ascendiendo en el escalafón profesional.

A lo largo de 1994 se llevaron a cabo algunas iniciativas que exigían conocer la verdad sobre los desaparecidos, aunque se quedase, en muchas ocasiones, en propuestas que no llegaban a consolidarse. Tras el escándalo en el que se vio inmerso Collor de Mello, su sucesor Franco tampoco estuvo a la altura de lo que familiares y víctimas esperaban respecto a sus demandas. Con la llegada de un nuevo presidente, Fernando Henrique Cardoso, las cosas cambiaron. Quizás esto se debió a la experiencia vivida por él mismo, habiendo sido un exiliado de la dictadura y haber estado ligado a los intelectuales de la izquierda que la combatieron.

---

<sup>448</sup> <https://www.torturanuncamais-rj.org.br/>.

<sup>449</sup> MIRANDA, Nil Mário y TIBURCIO, Carlos: *Dos filhos deste solo: ...*, p. 633.

<sup>450</sup> BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: *La justicia transicional en Brasil: el caso de la guerrilla de Araguaia*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2017, p. 65.

<sup>451</sup> <http://www.eaff.org.ar/brazil.eng.htm>.

<sup>452</sup> REALE, Miguel: *De Tancredo a Collor*, Sao Paulo, Editora Siciliano, 1992.

A finales de 1995 el gobierno de Cardoso firma la Ley 9140/95 de 4 de diciembre<sup>453</sup>. Con ella lo que se pretende es reconocer públicamente la muerte de 136 militantes políticos contrarios a la dictadura y, por ello, la obligación correspondiente del Estado de indemnizar a sus familias con cantidades económicas que iban entre los 100.000 y 150.000 dólares. En este caso, el propio Gobierno brasileño asume la responsabilidad por los secuestros, torturas, asesinatos, violaciones de derechos humanos..., cometidos durante la dictadura, por lo que «la aplicación de las disposiciones de esta norma y todos sus efectos se orientarán en el principio de reconciliación y participación nacional expresado en la Ley 6683, del 28 de agosto de 1979, Ley de Amnistía»<sup>454</sup>. Entre 1995 y 1998 se llegó a tener constancia de un total de 234 casos, de los cuales 148 fueron compensados económicamente.

Un posible error cometido por los dirigentes del país ha sido el de no aplicar medidas transnacionales a los militares o al ejército, es decir, a las fuerzas represoras respecto a la defensa de los derechos humanos. No es que no quisieran velar por los intereses de las víctimas, sino que lo que pretendían era evitar que estas medidas pudieran tener efectos retroactivos como había sucedido en otros países del continente. Ciertamente hubo algunas quejas de familiares y víctimas respecto a esta decisión gubernamental, pero no cuestionaron el acuerdo final al que se llegó con la élite a la hora de firmar la amnistía<sup>455</sup>.

Igual que en otros casos, tanto víctimas como familiares de la dictadura han priorizado la búsqueda de la verdad frente a otro tipo de acciones, como la recompensa o la reparación económica, entendiendo que esa es una obligación más propia de un Estado de Derecho. Es más, existía una especie de pacto no firmado entre el Ejército y las víctimas por las que ambas partes asumían que «lo mínimo que las familias podían esperar es la compensación y es lo máximo que los militares pueden aceptar»<sup>456</sup>.

Sin embargo, esta situación no fue obstáculo para que otras instituciones u organismos continuaran con la política de buscar la verdad y juzgar a los responsables. Compañías y asociaciones médicas comenzaron a investigar sobre la labor de otros médicos que colaboraron con la dictadura a la hora de llevar a cabo las torturas. Hasta un total de 26 fueron investigados<sup>457</sup> y se abrieron procedimientos disciplinarios contra ellos, siendo la primera vez tras lo sucedido con este colectivo tras el exterminio nazi, que se veían puestos frente a la justicia.

A pesar de todo, en Brasil no se han llevado a cabo juicios por parte del gobierno democrático por las violaciones de derechos humanos cometidos en la época de la dictadura<sup>458</sup>. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para que se afrontara ese pasado traumático por medio de otras vías, en este caso, la memoria y el derecho a saber. Es decir, se ha priorizado más esclarecer la verdad de lo ocurrido antes que enjuiciar a sus responsables. Por ello puede afirmarse que en Brasil, a diferencia del caso argentino, no ha tenido ni ha llevado a cabo una Comisión de la Verdad. La manera en que han abordado su pasado reciente ha sido mediante diferentes comisiones con respectivos propósitos de acción, como por ejemplo la Comissão Especial sobre Mortos e

---

<sup>453</sup> Conocida como la Ley de los Desaparecidos.

<sup>454</sup> Ley 9140/95, artículo 2.

<sup>455</sup> HAMBER, Brendon: «Living with the Legacy of impunity. Lessons for south Africa about truth, justice and crime in Brazil», *Unisa Latin American Report*, 13/2 (1997), pp. 8-10.

<sup>456</sup> BARAHONA de BRITO, Alexandra: «Verdad, justicia, Memoria y democratización en el Cono Sur», en *Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madrid, Istmo, 2002, p. 223.

<sup>457</sup> *New York Times*, 11-03-1999.

<sup>458</sup> Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos: *Derecho a la memoria... cit.*, p. 21.

Desaparecidos Políticos (CEMDP) de 1995, y la Comissão de Anistia del Ministerio de Justicia de 2002. Sin embargo, y a medida que ha pasado el tiempo, se ha propuesto la posibilidad de crear una Comisión Nacional de la Verdad<sup>459</sup> dentro del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH-3) de 2009.

A nivel federal se crea el Proyecto Derecho a la Memoria y a la Verdad de la Secretaría Especial de los Derechos humanos de la Presidencia de la República<sup>460</sup>, siendo alguno de sus objetivos la creación de monumentos que recuerden a las víctimas de la dictadura o la celebración de exposiciones con esta temática, y que han ido recorriendo el país, contando para ello con el apoyo tanto de ONG, como de Universidades y otras instituciones en defensa tanto de la memoria como de los derechos humanos<sup>461</sup>.

La Ley 9.140 al margen de que reconoce como fallecidas a aquellas personas que estén desaparecidas, es importante por otra serie de cuestiones: 1) Ha sido entendida como el reconocimiento expreso por parte del Estado brasileiro de su responsabilidad en la muerte y desaparición de opositores políticos a la dictadura. Esta ley contiene un anexo con un listado de 136 personas cuya desaparición fue probada a partir del Dossiê dos Mortos e Desaparecidos a partir de 1964 elaborado por organizaciones de familiares de las víctimas<sup>462</sup>. 2) Esta ley crea la Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), es decir, constituye una instancia que cumple, en cierto sentido, el rol de una comisión de la verdad, como veremos más adelante; 3) Se trata asimismo de una ley de reparaciones que concede indemnizaciones a los familiares de las personas que el listado define como desaparecidos, y a aquellas personas que la Comisión Especial logre determinar como desaparecidas en circunstancias de represión política por medio de sus investigaciones.

---

<sup>459</sup> Brasil: Ficha Número 4: «Reconoce como muertas a las personas desaparecidas en razón de participación, o acusación de participación, en actividades políticas, en el período del 2 de septiembre de 1961 a 15 de agosto de 1979, y da otras providencias, y Dispone sobre la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP). Ficha Número 7: «Comisión de Amnistía del Ministerio de la Justicia».

Ficha Número 14: «Programa Nacional de Derechos Humanos - PNDH-3».

Sobre el rol de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos y la Comisión de Amnistía consideradas como comisiones de la verdad, ver DE CAMPOS MELO, Carolina: «Justicia de Transición en Brasil: de Comisiones de Verdad a la Comisión de la Verdad», *Trabajo final en el marco del Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización*, Centro de Derechos Humanos (inédito), 2010, p. 16.

<sup>460</sup> <http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/indexc471.html?p=5>.

<sup>461</sup> Brasil - Ficha Número 10: «Proyecto Derecho a la Memoria y a la Verdad de la Secretaría Especial de los Derechos humanos de la Presidencia de la República».

<sup>462</sup> Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos: *Derecho a la memoria...: op. cit.*, pp. 33-35.